San Andrés, Isla, 23 de junio de 2022

Señor
Juez 1° Civil del Circuito
Ciudad

- Referencia: Proceso ejecutivo singular de mayor cuantía de JAIME POVEDA (por ante endosatario FERNANDO CORREA ECHEVERRI) contra ALFONSO ENRIQUE RAMÍREZ BERNAL
- Radicado inicial 2000-00012-00
- Radicado anterior 2004-00100-00
- Radicado actual 2013-00062-00

Comedidamente, con fundamento en el literal e) del numeral 2.° del artículo 317 del C. G. del proceso, apelo su auto # 200 de 15 de junio de 2022, notificado por anotación en estados electrónicos de procesos # 26 del 17 de junio de 2022, para ante su superior funcional.

Sustentación del recurso ante el juez que dictó la providencia
(expresión de las razones de inconformidad con la providencia apelada)

Debe ser revocado el auto recurrido por cuanto el presupuesto legal para decretar el desistimiento tácito, consistente en el expediente haya permanecido en secretaría por más de dos años sin que se realizara ninguna actuación, no se cumplió en este proceso.

El auto impugnado indica que en el sub examine, se ha proferido sentencia desde el 13 de marzo del 2000, y que la última actuación data del día 8 de agosto del 2019, fecha en la que se recibió el memorial fechado el 2 de agosto del 2019, a través del cual, la ORIP de la localidad, devolvió sin registrar un oficio expedido por este despacho; para concluir que el expediente ha permanecido en secretaría por más de dos años sin que se realizara ninguna actuación, término que se cumplió desde el pasado 2 de agosto del 2021.

Es de hacer ver que la parte ejecutante, en términos del numeral 2.° del artículo 317 ib., solicitó o realizó actuaciones varias, con lo cual evitó que se consolidara el plazo de 2 años a que se refiere el literal b) del mismo numeral.

En efecto en junio 25 de 2021 se presentó actualización de la liquidación del crédito y en mayo 31 de 2022 se pidieron medidas cautelares, resultando por demás sumamente curioso, por decir lo menos, que el auto impugnado no se hubiera referido a ellos y mas curioso aún que esas peticiones no hubiesen sido atendidas en su momento por el Despacho, así fuera para negarlas.

Ruego al honorable Tribunal controlar que dentro de lo remitido por el juzgado estén incorporadas las referidas actuaciones de esta parte (las cuales adosamos a este recurso) y verificar si las mismas fueron pasadas a despacho en termino legal por la secretaría y determinar si la omisión es por falta de adosamiento al expediente (físico o híbrido) o si habiendo sido en su momento pasado el expediente a despacho, no fueron atendidas.

Tanto la presentación de la actualización de la liquidación del crédito como la solicitud de medidas cautelares son actos idóneos para el impulso procesal, como claramente lo tiene establecido la actual posición al respecto de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil que citamos más adelante.

Del artículo 317 del C. G. del Proceso, se desprende la existencia de dos supuestos que habilitan la terminación anormal del proceso sin importar el estado en que se encuentre; interesando al sublite el segundo de ellos que alude a la existencia de una parálisis del proceso por dos años, luego de dictada la sentencia, considerándose como una sanción impuesta por la inactividad del demandante.

Bajo esta línea argumentativa, para que dicha sanción no se produzca se hace necesario que la parte a quien le corresponda impulsar el proceso lo haga; empero la norma habla de “Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”.

Sobre este punto específico la Corte Suprema de Justicia como juez constitucional unificando jurisprudencia se pronunció [STC11191-2020 MP OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE] indicando que (subrayas y negrillas nuestras):

«Siendo así, y dado que sobre los alcances del literal c) del artículo 317 comentado, esta Corporación no tiene un «precedente» consolidado, es necesario, a efectos de resolver el caso y los que en lo sucesivo se presenten, unificar la jurisprudencia, cuanto más si de ese modo se garantiza la seguridad jurídica e igualdad de quienes acuden a la administración de justicia.

2.- Es cierto que la «interpretación literal» de dicho precepto conduce a inferir que «cualquier actuación», con independencia de su pertinencia con la «carga necesaria para el curso del proceso o su impulso» tiene la fuerza de «interrumpir» los plazos para que se aplique el «desistimiento tácito». Sin embargo, no debe olvidarse que la exégesis gramatical no es la única admitida en la «ley». Por el contrario, como lo impone el artículo 30 del Código Civil, su alcance debe determinarse teniendo en cuenta su «contexto», al igual que los «principios del derecho procesal».

(...)

Ahora, contra la anterior conclusión podría argüirse que como el «desistimiento tácito» es una «sanción», y esta es de «interpretación restrictiva», no es posible dar a la «norma» un sentido distinto al «literal». Pero, tal hipótesis es equivocada, primero, porque que una hermenéutica deba ser restrictiva no significa que tenga que ser «literal», la «ley debe ser interpretada sistemáticamente», con «independencia» de la materia que regule; y segundo, no se trata de extender el «desistimiento tácito» a situaciones diferentes de las previstas en la ley, sino de darle sentido a una directriz, que entendida al margen de la «figura» a la que está ligada la torna inútil e ineficaz.

(...)

4.- Entonces, dado que el desistimiento tácito» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021 -2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c)» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

(...)

Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada.»

Esos memoriales (de los cuales adjunto copia de su remisión y prueba de recepción por ese Despacho) conteniendo peticiones de parte (actualización de liquidación del crédito y solicitud de medidas cautelares) interrumpieron los términos previstos en esa norma, por estar acordes con la etapa en la que se encuentra el proceso, pues es claro que como efectos de la interrupción se tiene que el tiempo transcurrido pierde con ella su eficacia y la cuenta queda en cero y vuelve a contarse el mismo tiempo previsto.

En estas materias las dudas deben resolverse en favor del acceso a la administración de justicia, como derecho fundamental reconocido en el artículo 229 de la Constitución Política. Así, por lo demás, lo ordena el artículo 11 del CGP [Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil, auto de enero 20 de 2021, MS MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GOMEZ, Exp. 047202000193 01].

Finalmente, de importancia mayor en el ejercicio hermenéutico, es detallar que como se está en presencia de sanciones procesales, su interpretación y aplicación es restrictiva, con reconocimiento de la justicia constitucional del órgano de cierre [C-273 de 1999].

Tanto así que se ha considerado [Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil, auto de febrero 12 de 2016, MS JOSÉ ALFONSO ISAZA, Exp. 110013103024-1997-26740-01] que:

« ... el desistimiento tácito no opera por el solo ministerio de la ley (ipso iure non solum operandi), puesto que la norma no contempla esa solución en modo alguno..., vale decir que [esa figura] opera por el decreto del juez y no por el simple transcurso del tiempo. De esa manera, mientras no haya decisión en ese sentido, no hay desistimiento... ”, y si bien surge el deber del juez de decretar la terminación una vez cumplido el término, lo cierto es que “no puede impedirse a la parte interesada que actúe, porque en buenas cuentas, cumplido el término propicio para el desistimiento, es irrefutable que el proceso sigue vigente, o mejor, desde el punto de vista jurídico está pendiente, no terminado, y en ese estado, ninguna norma impide que pueda ser impulsado por las partes.»

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Honorable Tribunal, revocar el auto apelado.

Del Señor Juez y del Honorable Tribunal, atentamente,

FERNANDO CORREA ECHEVERRI
CC 71631548 – TP 48753